

Jean Etienne Marie Portalis
DISCURSO PRELIMINAR
AL CODIGO CIVIL FRANCES

Introducción y traducción de
I. CREMADES y L. GUTIÉRREZ-MASSON

El Code Civil constituye, junto con la Declaración de los derechos del hombre, uno de los dos monumentos jurídicos de la modernidad. No radica únicamente su valor en la historicidad misma de su contenido jurídico concreto, como transacción entre el pasado y el futuro, entre la unidad y la diversidad, sino también en el código en cuanto forma en que se materializa la ideología de la codificación: rasgo distintivo entre las dos tradiciones jurídicas occidentales y común a los diferentes sistemas de la tradición civil. La postulada plenitud del contenido codificado, la proscripción de su heterointegración y la supremacía de la ley, por ejemplo, son fórmulas de compromiso entre la Política y el Derecho, de diálogo entre el poder y la libertad, de transacción entre ley y jurisprudencia, entre tradición y modernidad, revolución y restauración, que el código sustenta. El Code, un atentado también, en nombre del derecho romano, a lo que de progresivo quedaba todavía del derecho antiguo y acto final de un larguísimo proceso de consolidación de la nacionalidad francesa a costa de la diversidad, ha sido visto asimismo como sucedáneo de libertad ante la restricción definitiva de una emancipación política de consecuencias imprevisibles pero pronto intuitas. Como hijo de la autointerpretación universalista de una razón burguesa, social e históricamente condicionada, ésta sigue autocomplaciéndose en la permanente preservación de la forma que codifica no sólo ya las transformaciones numerosas y profundas de su contenido originario sino el totalmente divergente del derecho disidente. Del Discurso Preliminar de Portalis podría decirse sin incurrir en exageración que es una de las mejores definiciones de lo que es el Código Civil francés.

ORTALIS: Discurso preliminar al Código Civil francés

Jean Etienne Marie
Portalis

Discurso
preliminar
al Código Civil
francés

Cuadernos CIVITAS

Directores: Manuel Alonso Olea, Rafael Calvo Ortega, Luis Díez-Picazo, Eduardo García de Enterría, Jesús González Pérez, Aurelio Menéndez, Juan Montero Aroca, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Rodrigo Uría y Gustavo Villapalos.

Jean Etienne Marie Portalis

Discurso preliminar al Código Civil francés

Introducción y traducción de
I. CREMADES y L. GUTIÉRREZ-MASSON



EDITORIAL CIVITAS, S. A.

Primer edición, 1997

SUMARIO

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Copyright © 1997, by Jean Etienne Marie Portalis
Copyright © 1997, de la traducción al castellano I. Cremades
y L. Gutiérrez-Masson
Editorial Civitas, S. A.
Ignacio Ellacuría, 3. 28017 Madrid (España)
ISBN: 84-470-0866-5
Depósito legal: M. 10.424-1997
Compuesto en Gráficas Ferven
Printed in Spain. Impreso en España
por Closas Orcoven, S. L.
Paracuellos de Jarama (Madrid)

EL PROYECTO DE UN CÓDIGO CIVIL Y LA REVOLUCIÓN.....	9
NOTA BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL AUTOR.....	21
DISCURSO PRELIMINAR Portalis, <i>Consejo de Estado</i>	27

1¹. Mucho antes de la Revolución, la justicia del Antiguo Régimen ya había sido condenada por casi todos. La extrema lentitud y el coste excesivo de los procesos, la complejidad de los recursos, la multiplicidad de jurisdicciones, la transmisión familiar de los cargos, la usurpación de funciones jurisdiccionales, la receptación de poder político a través del poder de jurisdicción y el hermetismo del lenguaje, entre otras causas, habían arruinado la confianza del justiciable². Si bien el rechazo más profundo y decidido era el de la justicia penal, su arbitrariedad e inhumana-

¹ Robert BADINTER, *Une autre Justice, Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française*, Fayard, 1989, pp. 9 y ss.

² «Dans un siècle où la raison était reine et le beau et clair langage souverain, la justice conservait des traits gothiques et une démarche archaïque qui poussaient à en rire ou à s'en désoler», R. BADINTER, cit., p. 11.

nidad —desde 1780, el rey mismo era consciente de la necesidad de reformar la justicia criminal—, también la lentitud y lo costoso de la justicia civil provocaba un deseo de transformación. Los *cahiers de doléances*³ lo testimonian. Se ha señalado así que, tras la igualdad ante el impuesto, la transformación de la justicia es la reivindicación más general, significativamente presente en los *cahiers* de los tres órdenes. Entre las numerosas peticiones de los justiciables está la reclamación de una ley única y renovada para todo el reino: «Que los códigos civil y criminal sean reformados, simplificados, hechos inteligibles a todos y conformes con nuestras costumbres y con las Luces del siglo, para que sean después ejecutados uniformemente en todo el reino»⁴. Esta renovación de la justicia civil, de la criminal, del sistema judicial no era un hecho aislado, sin precedentes. Si bien todos habían leído a Voltaire y Montesquieu, si Mirabeau y Sièyes, entre otros constituyentes, se habían preguntado por las instituciones judiciales, si todos habían leído a Beccaria y muchos tenían muy presente el «modelo inglés», a través especialmente de los libros de Blackstone sobre las leyes criminales de Inglaterra o a través del lejano ejemplo del artículo 29 de la Magna Carta de 1225, del Acta de Habeas Corpus de 1679 o del Bill

³ Sobre esto, A. LEBRIGE, 1789: «La justice dans tous ses états», en *Une autre justice...*, cit., pp. 39-55.

⁴ «Résumé des cahiers sur la réforme judiciaire établi par la Chancellerie», artículo 15, en E. SELIGMAN, *La justice en France pendant la Révolution*, París, 1901, t. I, p. 493, citado por R. BADINTER, p. 14, *ob. cit.*

of Rights de 1628, también tenían en cuenta no sólo logros concretos, como la abolición de la pena de muerte por el gran-duque de Toscana o la promulgación de nuevos códigos por Federico el Grande o José II, sino, en definitiva, la obra de las Luces en toda Europa y también, y muy especialmente, en los jóvenes Estados Unidos de América. El duque de La Rochefoucauld d'Enville había publicado la traducción de 1783 de las declaraciones americanas, todas ellas garantes de la libertad y seguridad individuales —como la jeffersoniana Declaración de derechos de Virginia de 1776—, que iban a influir decisivamente en la Declaración de 26 de agosto de 1789⁵.

Toda la edificación de una nueva justicia gira sobre la confianza absoluta en la ley y la desconfianza hacia el juez. No sólo se produce la sacralización de la ley, la cual, en tanto que expresión de la «volonté générale» (art. 6 de la Declaración) no puede ser mala. Raros son, al parecer los que, como Condorcet, ven en la Declaración de derechos la «muralla de los ciudadanos contra las leyes injustas que sus representantes podrían estar tentados de hacer»⁶. La desconfianza hacia los jueces se consagra constitucionalmente en la Constitución del 3 de septiembre de 1791: «No hay en Francia autoridad superior a la de la ley»; algo pensado para el rey, pero también para los jueces. De ahí tanto la conversión del juez

⁵ Seguimos la exposición de R. BADINTER, cit., pp. 15 y ss.

⁶ Véase R. BADINTER, cit., p. 18.

en boca de la ley, mero aplicador y no intérprete, como la instauración del jurado en el ámbito criminal y en el civil. La influencia del modelo inglés es definitiva en esta sumisión del juez al jurado. La Revolución hace tabla rasa de la justicia penal del Antiguo Régimen. Apenas les queda algo de poder a los magistrados en materia represiva. La Revolución confía a los ciudadanos, directamente en materia criminal, o por sus representantes, en materia de policía municipal o correccional, el poder de juzgar⁷.

También la desconfianza hacia los jueces presidirá en materia civil. Concreciones de aquélla son tanto la instauración del jurado civil como la potenciación de la conciliación, el arbitraje y los «tribunales de familia». Emblemática de esta tendencia es la institución del juez de paz: «En el corazón del sistema judicial, el juez de paz, institución que se tomaba en préstamo de Holanda, hombre de bien antes que hombre de ley, elegido por sus conciudadanos, debía aplicarse a hacer reinar en cada cantón, por su autoridad moral y su humanidad, la paz civil, evitando el recurso a las causas judiciales. Sueño de una ciudad apaciguada, fraternal, en la que leyes poco numerosas y claras sucederían al "cuerpo pedante y charlatán" de los textos antiguos, en la que las costumbres, esclarecidas por la razón, serían suaves, los conflictos poco frecuentes y los procesos más raros todavía»⁸.

⁷ R. BADINTER, cit., pp. 17-21.

⁸ R. BADINTER, p. 24

En el siglo de la soberanía de la razón, de las ideas simples y distintas, del lenguaje claro y exacto no podía faltar el deseo de un sistema jurídico simple y preciso que estuviera al alcance de la comprensión de todos los ciudadanos. Un código, como se llegó a conceptualizar al de 1804, que pudiera ser consultado directamente, que revelara su sentido sin necesidad de jueces o abogados, que relegara la litigiosidad a la mala fe. Un manual y una guía de la vida ordinaria de los derechos y las obligaciones. Pero si bien es cierto que este concepto de código está presente en el Discurso preliminar, también lo es que en éste mismo, y en la historia de la elaboración del *Code*, se pone de manifiesto el carácter utópico del deseo de prescindir de abogados y juristas que en su origen albergaba la Revolución⁹.

Si el fenómeno del particularismo jurídico era antiguo, en el siglo anterior a la Revolución este problema requería para la clase social ascendiente y los marginados de siempre una pronta y drástica solución. En el siglo XVIII, entre los interesados en obstaculizar toda simplificación del derecho —un aspecto del particularismo jurídico es la complejidad— estaban fundamentalmente los juristas prácticos, en larga medida al servicio de la aristocracia, y el clero. Entonces, como hoy y antaño, el reproche de insensibilidad moral arrojado a los hombres de leyes toma pretexto de y se confunde con la natural pro-

⁹ J. H. MERRYMAN, *La Tradición Jurídica Romano-Canónica*, FCE, Méjico, 1971, p. 58.

pensión al formalismo rituario y el natural conservadurismo, hecho hábito, que son propios de los juristas prácticos de todo tiempo y, en aquel momento histórico, acentuados como defensa frente a toda simplificación del sistema jurídico. Lucha contra los hombres de leyes, de la cual la literatura culta, desde la comedia griega, y la de base popular ofrecen enunciados insignes, como el de la calderoniana oposición del riguroso y positivista fiscal, encarnado por el demonio, frente al nuevo procurador Cristo y su Ley de Gracia, «la que yo escribí con sangre en corteza deste árbol», hasta los de la literatura del iluminismo y el romanticismo, pasando por el goetheano «Juristen böse Christen»¹⁰.

2. La Asamblea constituyente decidió, por tanto, en la ley sobre la organización judicial de 16 de agosto de 1790 y en la Constitución de 1791, que se haría un código general de leyes «simples y claras apropiadas a la Constitución», un código de leyes civiles «comunes a todo el reino». Se seguía así el deseo del pueblo, la aspiración de las clases más esclarecidas de la nación. Con ello no se decía más que una ya vieja aspiración de la Francia ilustrada de mediados del XVIII, que al menos en cuanto al deseo de la uniformidad ya había venido precedida por una decidida actuación real en los siglos anteriores. Se abría así el camino para la creación de un derecho civil común y uniforme, de un código civil nacional.

¹⁰ Véase G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, II Mulino, Bolonia, 1976, p. 33 y nota 16 de la misma página.

Un código, por tanto, de leyes simples y claras, apropiadas a la Constitución. De un lado, que la ley sea clara, simple, precisa, expresión esto mismo de su perfecta adecuación a la naturaleza. Adecuación ésta que es la garantía misma, tanto de su infrecuente violación por su misma fácil comprensión —garantía de su cumplimiento por su universalidad ligada a su adecuación al buen sentido—, como de la rareza de la litigiosidad. La utopía de la «ciudad ideal» estaba en marcha¹¹.

Se hacía así también necesaria una reforma profunda de la justicia, de la organización judicial. Esta, ya en el ámbito más urgente de lo criminal, como también en el de lo civil, debía estar en perfecta armonía con los derechos del hombre y del ciudadano, derechos naturales garantizados por las reglas jurídicas indisociables de ellos. Pero las asambleas revolucionarias se aprestan desde el principio a regular las cuestiones más urgentes —el matrimonio, el divorcio, el régimen de sucesión y los testamentos— insertando estas nuevas disposiciones en un cuerpo jurídico donde lo viejo —*coutumes, droit écrit*, ordenanzas reales, derecho canónico— y lo nuevo coexisten en abierta disonancia, en ciertos casos, con los postulados racionales y revolucionarios de claridad, orden y simplicidad. Si bien el conjunto de este *droit intermédiaire*, surgido desde la Asamblea Constitu-

¹¹ J.-P. ROYER, «Les innovations des constituants en matière de justice civile ou la "Cité idéal"», en *Une autre justice...*, cit., pp. 57-69.

cional (1789), hizo más urgente que nunca su unificación a través de una codificación, siempre dificultada durante aquellos años; si bien pronto se consideraron sus disposiciones actos legislativos particulares, tuvieron al menos el mérito no menor de haber creado una lengua legislativa nueva, cerrada y limpia, alejada del tono declamatorio que marca la elocuencia de la época¹².

Derechos del hombre y del ciudadano, garantía constitucional de los mismos, transformación de la justicia penal y civil, y una legislación clara y precisa, tales fueron las aspiraciones de los revolucionarios. A este *droit intermédiaire*, como se denomina a la justicia y al derecho de la Revolución, a la justicia y al derecho del período comprendido entre el fin del Antiguo Régimen y Napoleón, le faltaron las condiciones de paz civil necesarias para su afirmación. Pero a él debe Francia no sólo instituciones tan fundamentales, por ejemplo, como el Tribunal de Casación, sino especialmente los principios de la legislación penal —legalidad, proporcionalidad, necesidad de la pena, irretroactividad de la ley penal, igualdad ante la ley— inscritos en la Declaración de derechos del hombre, que tiene hoy valor constitucional en Francia, así como una suerte de convicciones profundas en favor de la justicia, de la libertad y la paz civil¹³.

¹² P. OURLIAC y J. DE MALAFOSSE, *Histoire du Droit Privé*, t. III, «Le droit familial», Presses Universitaires de France, París, 1968, p. 21.

¹³ R. BADINTER, en *Une autre justice...*, cit., pp. 24 y s.

3. Otorgar a la nación un código de leyes civiles uniformes había sido el deseo de los revolucionarios. Este monumento había de ser la manifestación misma de la unidad francesa. Pero la tarea no iba a resultar sencilla. No sólo que ya desde 1789 algunos juristas, como d'Olivier y Philippeaux, habían dirigido a la Asamblea nacional proyectos de Código civil, sino que incluso tres proyectos de *Code civil*, elaborados en nombre del *Comité de législation* por Cambacérès, Presidente de la Convención, fueron rechazados por la Convención Nacional en 1793, 1794 y 1796. En primer lugar, hay que considerar que otras urgencias reclamaban en materia jurídica la atención de la Asamblea constituyente. Así ya de 1791 es el *Code pénal*.

El verdadero creador del Código civil francés fue el *Comité de législation* o, su nombre completo, *Comité de législation civile, criminelle et de féodalité*, formado el 14 de octubre de 1792, integrado por cuarenta y ocho miembros, todos ellos pertenecientes a la Convención, y presidido por Cambacérès. Su tarea, ejecutiva, legislativa y judicial, realizada bajo el control soberano de la Convención, era verdaderamente

¹⁴ Tenemos en cuenta el buen extracto de Philippe SACCHIAU, «La Législation civile de la Révolution française (1789-1804)», París, 1898, pp. 47 a 55, recientemente publicado en *Nouveaux du Code Civil*, Flammarion, 1989, pp. 14-22 (Historique du Code civil), en la cual se contienen también en extracto algunos de los trabajos preparatorios del *Code civil*, cuya totalidad fue reunida en su día por P. A. FENET, escogidos y presentados bajo la dirección de François EWALD, por varios autores.

ingente, sólo comparable al *Comité de salut public*. Pese a ello, el *Comité*, aun antes de que la Convención le reclamara la presentación de un proyecto de Código civil, sabía que dependía de ella la consecución de una aspiración tanto tiempo demorada, y desde su formación se había dispuesto al trabajo en medio de sus innumerables ocupaciones. Por eso, cuando en el verano de 1793, la Convención libra un decreto por el que se solicita del *Comité de législation* un proyecto de Código civil, la orden puede ser cumplida antes de mes y medio después, momento en que, el 9 de agosto, Cambacérès lo presenta a la Asamblea en nombre del *Comité*, dando cuenta del plan y los principios. Tanto por la manera de proceder en los trabajos preparatorios dentro del *Comité*, como por la, en principio, gran dificultad de la labor y la premura con que se realizó, el recuerdo del empeño de Justiniano acude dócilmente a la imaginación. También aquí, como en la lejana Bizancio, la tarea previa había facilitado las cosas. La actividad sintetizadora de los juristas, Pothier ante todo, la libertad de acción e innovación, no trabada ya por muchos de los principios del orden anterior, destruidos por la actividad revolucionaria desde 1789, y la propia actividad legislativa de las asambleas legislativas habían allanado y facilitado el camino. Sin embargo, no iba a tener éxito. Aunque decretado por la Convención, no llegó a ser promulgado. Sólo algunas partes separadas fueron decretadas. La Convención reprochará al proyecto que, siendo como era filosófico, no lo fuera suficientemente. Se deseaba un código que no pre-

sentara sino los principios y sus consecuencias esenciales. Pero cuando un nuevo proyecto es presentado por Cambacérès el 9 de septiembre de 1794, el reproche es justo el contrario. Según las propias palabras de Cambacérès en el discurso de encabezamiento del proyecto de 1796, el *Comité de législation* se había avenido, de acuerdo con los deseos de la *Convention*, a «separar los principios de los desarrollos, las reglas de los corolarios, y a reducir la obra a una colección de preceptos en los que cada uno pueda encontrar las reglas de su conducta en la vida civil». Prueba de ello es la reducción de los 719 artículos originales a 297. En esta ocasión es la Convención la que se alarma ante la falta de examen de los casos particulares, pues se temía que los jueces llegarían a convertirse fatalmente en legisladores. No fue el *Comité* sino la «*commission de la classification des lois*» quien presentó el tercer proyecto al Consejo de los Quinientos, el 14 de junio de 1796. Ya no 719 artículos ni 297, ahora un total de 1.104 lo integraban. Presentado por Cambacérès, seguía el plan del de 1793. Apenas discutido, el ambiente ya enrarecido, sólo dos de sus artículos fueron decretados. El 18 y 19 brumario (9 y 10 de noviembre de 1799) no tardaría en llegar. El Código civil iba a ser obra definitivamente de Napoleón. El Consulado, que pone punto final a la época de la Revolución, marca, en el dominio legislativo, una reacción moderada y una vuelta a la tradición. El decreto de los cónsules del 12 de agosto de 1800 (24 thermidor del año VIII) encargó a Tronchet, Maleville, Bigot-Préa-

Fueron consultados el Tribunal de Casación y los Tribunales de apelación. Debía ser discutido por el Consejo de Estado y el Tribunado, y votado por el Cuerpo legislativo. La discusión, presidida por Napoleón o, en su ausencia, por el inevitable Cambacérès, fue seguida en el Consejo de Estado. El Tribunado, que se resistió de entrada y manifestó veleidades de oposición, fue depurado el 16 thermidor del año X (1802), y sus discusiones por tanto suspendidas; los cónsules supusieron entonces las comunicaciones oficiosas del Consejo de Estado al Tribunado precediendo las comunicaciones oficiales, y al cabo de tres años desde el comienzo, después de que en el espacio de un año fuera votado y promulgado por títulos, en total treinta y seis leyes, éstas fueron reunidas por la ley de 30 ventoso del año XII, el 21 de marzo de 1804, bajo el título de *Code civil des Français*. El código fue así votado como un todo dos meses antes de que Bonaparte fuera proclamado emperador de los franceses el 18 de mayo de 1804. En 1807 le fue cambiado oficialmente el nombre y pasó a llamarse *Code Napoléon*, nombre que por conveniencia se utiliza hoy para referirse al *Code* tal como fue promulgado primeramente, pues, tras ciertos avatares respecto a la denominación, finalmente, desde 1870, el título aceptado es el de *Code civil*.

Jean Etienne Marie Portalis nació en Bausset, Departamento del Var, en 1745, en el seno de una familia perteneciente a la alta burguesía de Provenza. Hizo sus primeros estudios en Tolón y Marsella y la carrera de Derecho en Aix, en cuya universidad su padre ocupaba la cátedra de Derecho natural. Esta circunstancia y el fuerte influjo del ambiente jurídico en el que transcurría su vida llevaron a Portalis al estudio y a la profesión del derecho. Formación teórica universitaria y cercanía con el ejercicio cotidiano de la abogacía en el despacho de Colonia, jurista de gran renombre, y también profesor en su misma universidad, constituyeron los dos pilares de su educación como jurista.

De talento precoz, escribió sus primeras obras a los diecisiete años: *Observations sur un ouvrage intitulé*

Emile ou l'éducation y *Des préjugés*. Ingresó en la abogacía en 1765, y pronto sorprendió la inquietud renovadora con la que combatió las maneras ampulosas de sus colegas, lo que le hizo cosechar enemigos y toda suerte de dificultades en sus comienzos profesionales. Concentró su interés en las relaciones entre el poder civil y el eclesiástico, y la destacable imparcialidad que mostró en su estudio de la situación legal de los protestantes, se trata de la *Consultation sur la validité des mariages des protestants de France* (1771), le llevó a defender la validez de sus matrimonios.

Los rasgos más destacados de su personalidad fueron la austeridad, el rigor y la seguridad en sí mismo, y una brillantez intelectual que no pudo oscurecer la ceguera progresiva de la que adoleció desde su juventud hasta sus últimos días.

Su espíritu conservador y moderado le impidió participar en el movimiento revolucionario; la enemistad de unas de las grandes figuras de la revolución, Mirabeau, le valió gran número de vejaciones y la necesidad, en primer lugar, de retirarse al campo, y más tarde, de huir a Lyon. Allí cometió la torpeza de defender públicamente al Rey, viéndose obligado a huir nuevamente, esta vez a París, donde fue encarcelado por orden de Robespierre. Pero, muerto éste, fue liberado en 1794; reanudó el ejercicio de su profesión y llegó a rechazar poco después su ingreso en el Tribunal de Casación. Implantado el Directorio, fue diputado en el Consejo de Ancianos y, más

adelante, presidente de dicha asamblea gracias a la victoria de su partido, constitucional y moderado, en las elecciones al congreso. Por entonces estaba ya casi ciego y, sin embargo, su entereza y su memoria prodigiosa le permitieron ocultar su invalidez.

Por su moderación y su rechazo de cualquier medida violenta, así como por su militancia en el partido constitucional, que se había aliado con el realista, fue de nuevo proscrito, el 18 fructidor. Obligado a emigrar a Alemania, permaneció allí durante dos años. En ese tiempo, escribió un tratado, *De l'usage et de l'abus philosophique durant le XVIII^e siècle*, obra que deja traslucir el profundo bagaje cultural que Portalis adquirió durante su exilio gracias a la lectura, a la investigación y la frecuentación de los círculos intelectuales alemanes, sobre todo de los filósofos de la Escuela de Derecho Natural.

Consiguió regresar a Francia tras el golpe de Estado del 18 brumario y vio en Bonaparte la única persona capaz de restablecer el orden y la moderación en Francia. Su lealtad se vería recompensada, pues inició una brillante carrera bajo la égida napoleónica, primero en calidad de comisario del gobierno en el *Conseil des prises*, más adelante como miembro del Consejo de Estado y, finalmente, como ministro del culto. Pero su tarea más relevante consistió, sin duda, en formar parte de la comisión designada por Napoleón, el 24 thermidor del año VIII (12 de agosto de 1800), para redactar el *Code civil*, junto a Tronchet (presidente del Tribunal de Casación y presidente de la

y *Legat de Preameneu* (miembro y comisario del Tribunal de Casación, respectivamente), todos juristas moderados que, aun procediendo del *Ancien Régime*, habían asimilado el fenómeno revolucionario y fueron capaces, por ello, de elaborar un código de transacción que, tras algunas vicisitudes, vio la luz en 1804.

Portalís fue el más activo y carismático de los comisionados y se le atribuye tanto la inspiración filosófica como las principales doctrinas del *Code civil*. Muy influido por la formación romanística recibida en su tierra natal, trató por todos los medios de hacer prevalecer en su elaboración el elemento romanístico, tarea en la que fue secundado por Maleville. Se hizo famoso a raíz del discurso preliminar de presentación del Proyecto de *Code civil* ante el Consejo de Estado.

Como responsable de los asuntos del culto, también jugó un papel destacado en la conclusión del Concordato entre Francia y la Santa Sede en 1801 y en la elaboración de los artículos orgánicos para su desarrollo y aplicación. Ingresó en la Academia Francesa en 1806, y el Panteón, desde su muerte, guarda celosamente sus cenizas junto a las de otros artífices del *Code civil*.